

AMSAFE repudia el avance privatizador de la Educación Pública en el ámbito de la Enseñanza Técnico Profesional

Martes 10 de enero de 2017

✘ AMSAFE a lo largo del pasado 2016 denunció la política de subejecución de los fondos destinados a Educación, Ciencia y Tecnología; advirtiendo que la finalidad de las mismas eran bajar el piso presupuestario y reasignar las partidas a otros fines. En otras palabras denunciemos la implementación de políticas neoliberales que tienen como objetivo ajustar mediante la desinversión y la transferencia de fondos al sector privado.

En medio del conflicto por las cesantías, el Ministerio de Educación de la Nación planea recortar las funciones del INET y crear una Agencia Nacional de Formación de Talentos. El Ministro Esteban Bullrich y sus aliados empresarios van por la caja del INET, es decir, por el presupuesto asignado por la Ley 26058 de Educación Técnica Profesional que el pasado año 2016 fue de 3.300 millones de pesos.

Las Escuelas Técnicas brindan a sus estudiantes una educación orientada a formar ciudadanos críticos, profesionales pensantes capaces de interactuar con la realidad para transformar las relaciones trabajo-producción con el fin de atender a la necesidad de aportar a un desarrollo inclusivo.

Estas escuelas se transformarán, a partir de las nuevas políticas del INET, en escuelas de capacitación específica con el fin de atender las demandas de grandes Empresas reflejadas en el informe "Capacidades 2020". De esta manera se utilizarán recursos para satisfacer los requerimientos empresariales, lo que significa un vaciamiento de la educación pública, una vez más castigada por las políticas neoliberales.

Mediante mecanismos de asesoramiento, pasantías, tutorías empresarias, entre otros, se utilizarán los fondos que anteriormente eran destinados a las escuelas para la adquisición de equipamiento, insumos, inversión en proyectos de desarrollo tecnológico, etc. Esta transferencia expresa un nuevo avance en el vaciamiento de la educación pública. Un avance privatizador destinado a financiar los programas demandados por los grupos económicos cuyos CEOS se han enquistado en el Estado.